

LA ALIANZA POR EL SAHEL: UNA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA EN ÁFRICA

Paula Mora

Asistente de Investigación de Civismo

En el 2019, España recibió un total de 107.689 migrantes de África, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre un total de 664.557, lo que equivale al 16,2% del total de extranjeros en España. En la estadística de migración y población de Eurostat de 2017, España se trata del noveno país con más migrantes por cada mil habitantes, con 11,4. A través de estos datos, se puede apreciar cómo el continente vecino impacta directamente en nuestro país. Estas personas huyen de regiones paupérrimas, en las que la falta de respuesta a sus necesidades más críticas perpetúa la crisis humanitaria. España se muestra favorable a mejorar las condiciones de vida en estas regiones, sin embargo, no parece tomar un papel realmente activo que otorgue buenos resultados.

El Sahel (“borde, costa” en árabe) es la zona de transición entre el norte y el sur del continente africano. También lo recorre de este a oeste, con un área total de 3.053.200 km², constituyendo un cinturón de 5.000 km. Se trata de una zona privilegiada, pues el desierto no se entiende como un obstáculo sino como una vía de comunicación. No obstante, es una de las regiones más pobres del planeta. El cambio climático ha provocado que, allí, el aumento de temperaturas vaya a un ritmo 1,5 veces más rápido que el de la media mundial,

lo que ha multiplicado las sequías (de una cada diez años a una cada dos). La inseguridad se ha incrementado desde los ataques del 2004 en el Borno, estado de Nigeria, que hace frontera con Camerún y el Chad, por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram, así como por la creciente influencia del grupo en estos países junto con Níger, y por la presencia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM por sus siglas en inglés), presentes en el norte de Malí (conflicto del 2012, que comenzó por cuestiones independentista y llevaron a un golpe de Estado), el este de Mauritania, Níger y el oeste del Chad. Esto ha provocado que 4,2 millones de personas de la región se hayan desplazado y que más de un millón se vea incapaz de encontrar trabajo (aunque más del 64% de sus habitantes son menores de 25 años). Por estas razones, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que, de hoy a 2050, más de 85 millones de sahelianos se verán obligados a emigrar.

España, junto con la Unión Europea, empezó a interesarse seriamente en esta región a partir de la crisis multidimensional de Malí. Los objetivos del primer contacto español allí pasaban por estabilizar las zonas del conflicto, centrándose en dicho país pero no exclusivamente. Este primer punto

muestra el papel secundario de España, pues simplemente participó como un proveedor de armas, combatientes y otros recursos en la Operación Serval (que se desarrolló entre el 11 de enero de 2013 y el 15 de julio del 2014) y como testigo en la Operación Barkhane (sigue vigente a día de hoy), la más exitosa operación militar europea, que fue establecida por Francia; así como en el resto de operaciones civiles y militares de la Unión Europea: EUTM Malí (misión que pretende capacitar al ejército maliense para hacer frente al yihadismo), EUCAP Sahel Malí (misión civil para la mejora de las infraestructuras y las condiciones de vida de la gendarmería), EUCAP Sahel Níger (misión civil de *capacity building* para el refuerzo de las capacidades de defensa y seguridad nigerianas) y también en MINUSMA (misión de paz establecida por el Consejo de Seguridad para estabilizar el país tras la rebelión tuareg del 2012) de las Naciones Unidas. El papel de España se ha centrado sobre todo en la formación y el asesoramiento del ejército maliense. La única área de liderazgo ha sido el proyecto GAR-SI Sahel, de la Unión Europea, a través del cual, la Guardia Civil española ayuda a la creación de gendarmerías en Senegal, Malí, Burkina Faso, Chad y Níger.

El segundo objetivo se centra en los flujos migratorios ordenados y controlados; el tercero, en promover el desarrollo bajo los ideales democráticos y de derechos humanos.

El rol pasivo de España también se puso de manifiesto en 2017, cuando Francia, Alemania, la Unión Europea, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, la Banca Africana para el Desarrollo y el Banco Mundial crearon la Alianza por el Sahel. Esta organización es una muestra de apoyo al G5 Sahel, una alianza entre Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y el Chad para hacer frente a las amenazas comunes, creada en febrero de 2014. La Alianza para el Sahel pretende ayudar a la estabilización de la región y su desarrollo. En otras palabras, apoyar las prioridades de desarrollo del G5. Nuestro país entró en 2018, y trabaja mayoritariamente a través de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Los objetivos consisten en la movilización de inversiones, acelerar los proyectos de desarrollo, medir los resultados obtenidos, formar a los jóvenes y crear miles de puestos de trabajo, aumentar la irrigación para proporcionar seguridad alimenticia, desarrollar las energías renovables, mejorar el acceso a servicios básicos y agua potable, reforzar el contrato social y crear condiciones para un crecimiento durable e inclusivo.

Pese a la falta de iniciativa pasada, a España se le ha presentado una oportunidad, puesto que, desde el pasado 24 de junio, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asumió la presidencia de la Asamblea General de la Alianza por el Sahel, donde se coordinan los fondos de desarrollo que se destinan a los países del G5. Además, en 2021, el general español Fernando Gracia tomará el mando de EUTM Malí. Este cargo no hará que España asuma la jefatura de la misión, puesto que esta es del Eurocuerpo, una fuerza militar con sede en Estrasburgo que responde ante la UE y la OTAN. Debemos añadir que

el Gobierno, el pasado 19 de julio, anunció que doblaría su esfuerzo militar en la zona, aportando unos 300 soldados más (lo que duplica el número actual), dos helicópteros NH-90 y un avión de transporte Airbus 400M en situación de *on call*. Gracias a estas dotaciones, España se consolida como el primer contribuyente en una de las tres misiones militares de la región: EUTM Malí.

Parece que nuestros políticos han entendido la importancia de la estabilidad vecinal para asegurar la seguridad regional, e intentan influir de manera positiva en ella. Sin embargo, esto no será suficiente. En los últimos diez años, España ha destinado más de 650 millones de euros al Sahel, territorio considerado como prioritario por la AECID, pero esta cifra queda muy por debajo de la otorgada por Francia (3,24 mil millones entre 2013-2018 a través de la AFD), lo que nos resta influencia. A esto se suma el liderazgo francés y de la UE en la Alianza del Sahel (por ejemplo, en el nivel político estratégico, Francia encabeza el primer pilar, el de la lucha contra el terrorismo).

Cambiar el liderazgo de la organización es una tarea difícil, pero puede lograrse. España debería cuestionarse no solo apoyar las misiones existentes, sino quizás crear una nueva en el marco de las necesidades y la perspectiva de los países del G5. Maman Sidikou, el secretario ejecutivo del G5 Sahel, señaló una necesidad en la última reunión del grupo: "A veces se piensa que [...] solo las organizaciones internacionales pueden constituir los operadores locales, pero es necesario crear otras asociaciones enfocadas en la implementación y la

filtración de la ayuda al desarrollo en la base de la pirámide". También cabría la creación de un nuevo instrumento financiero para las operaciones de reacción rápida, como propuso Nani Mohamed Salem, el director general de Finanzas, Inversiones Públicas y de la Cooperación Económica.

Para concluir, pese a que España parece entender la importancia del Sahel como un factor necesario para la estabilidad regional y a su participación activa en diferentes iniciativas, carece de liderazgo. Este año se nos han presentado ciertas oportunidades clave que podrían haber transformado nuestro papel en la región, para conseguir resultados más favorables. Los responsables de estas organizaciones y países han hablado, y deben ser escuchados. Un enfoque eurocentrista no valdrá de nada, ya que el cambio llegará cuando entendamos el problema y los medios para solucionarlo. Es importante que nuestro país pueda abanderar un nuevo enfoque civil, aumentando su influencia en el desarrollo económico y social de la región, de modo que sirva también como escudo para evitar la propagación del extremismo yihadista.

ESPAÑA DEBERÍA CUESTIONARSE, NO SOLO APOYAR MISIONES EXISTENTES, SINO CREAR UNA NUEVA EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES
